

La antesala al diálogo



SIBCI

Durante abril continuaron las protestas y la represión. También se destituyó a una diputada de la oposición y crecieron los riesgos para el ejercicio del periodismo. Los inicios del diálogo entre Gobierno y oposición marcan nuevamente la agenda política donde se hace imprescindible el reconocimiento y encuentro de las partes si se quiere avanzar hacia un bien común para la sociedad

El 10 de abril, en víspera del aniversario doceavo del golpe de Estado de 2002, en el Palacio de Miraflores se encontraron representantes del Gobierno nacional y la oposición política para sentar las bases de una discusión sobre la crisis en el país. Los pasos para llegar al evento fueron largos, pues arrancaron sesenta días y cuarenta muertos después del inicio de las protestas del 4 de febrero en Táchira y el 12 de febrero en Caracas. La reunión se hizo a petición de los cancilleres de Unasur que estuvieron en Venezuela semanas atrás, y contó además con la bendición del papa Francisco y la presencia de la Iglesia católica.

Sin embargo, los saldos de este periodo abarcan no solo lo político, sino también los cam-

bios económicos y sociales anunciados hace un año con la victoria de Nicolás Maduro en unas reñidas e impugnadas elecciones. Estos son los resultados de muchas facturas acumuladas, ante las cuales el Gobierno nacional no cuenta con los mismos capitales financieros ni carismáticos para sortear con holgura la crisis, así que ha apelado a la represión sistemática de protestas, lo que no disminuye las incomodidades de base de la ciudadanía movilizada.

Ciertamente, el desarrollo del ciclo de protestas ha decantado en una focalización de las zonas en conflicto. Se ha acotado a solo algunas zonas de las principales ciudades del país: San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Puerto Ordaz, Valencia, Maracay, Barquisimeto, el eje Puerto La Cruz-Barcelona-Lechería, y Caracas. Tampoco han sido movilizaciones masivas, pero sí demuestran una composición multclasista en Los Andes, Carabobo y Puerto Ordaz, donde las razones de las protestas van más allá de la agenda política y se imbrican con el desabastecimiento, la inflación y la inseguridad. En Caracas, aunque la mayor parte de los choques entre manifestantes y uniformados ha ocurrido en Chacao, los jóvenes que participan en esos episodios no suelen ser de allí, sino que vienen de diversos barrios y zonas populares de Caracas a un sitio donde se sienten más protegidos y donde no corren riesgo de ser reconocidos por los

grupos armados que puedan operar en sus comunidades. También hubo durante semanas una serie de guarimbas que bloqueaban el paso en el sureste caraqueño y que generaron más rechazos que solidaridades entre los vecinos, pues solo ellos y no el Gobierno se veían afectados. Sin embargo, las arremetidas continuas y desproporcionadas de la Guardia Nacional y la policía, que incluyeron no solo bombas lacrimógenas y perdigones, sino también chorros de agua contra las viviendas y detenciones selectivas de vecinos, lejos de calmar los ánimos, aumentaron la conflictividad.

Hasta los momentos, solo las dos primeras muertes del 12 de febrero, la del joven Bassil Dacosta y un líder del 23 de enero, Juan Montoya, han recibido algún avance público en investigaciones judiciales. Por ambas muertes está señalado un grupo de funcionarios del Sebin que se encuentran detenidos. Sin embargo, hasta los momentos no se ha aclarado qué órdenes obedecieron al abrir fuego contra la manifestación que prendió la chispa en Caracas.

El Gobierno ha denunciado que también han muerto uniformados en el contexto de las manifestaciones. Han incluido en las estadísticas al menos a seis miembros de cuerpos de seguridad del Estado que supuestamente han muerto por la acción de francotiradores cuando intentaban remover barricadas o controlar alguna protesta. A pesar de ser muertes de funcionarios, no se ha revelado quiénes son los francotiradores ni a quién obedecen.

Según las cuentas de la organización Foro Penal, que ha hecho acompañamientos en todo el país de los detenidos en el contexto de las manifestaciones, hasta la segunda semana de abril hubo: 2 mil 354 detenidos, mil 297 liberados con medidas cautelares, 403 con libertad plena, 422 por verificar, 101 liberados sin presentación, 98 privados de libertad y 33 retenidos.

La presencia continua de defensores de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, ha revelado las malas prácticas en las detenciones, la administración de justicia y vicios en los sistemas judiciales. Asimismo, se han sistematizado cerca de cincuenta casos que podrían calificar como torturas y tratos crueles contra detenidos. De esos, la Fiscalía apenas reconoce un par como casos que podrían ser considerados de tortura. La clasificación y la interpretación de los niveles de gravedad de la represión están en manos de la justicia.

Asimismo, han aumentado los ataques dentro de las universidades. En la UCV no solo hubo dos agresiones contra estudiantes de parte de grupos irregulares armados, sino que además aplicaron el método de desnudar a los estudiantes agredidos para humillarlos y reducir su movilidad. También contra la UCV, los jóvenes contaron más de mil bombas lacrimógenas lanzadas en una sola jornada. El hecho ocurrió cuando el Gobierno prohibió la movilización de una marcha por el municipio Libertador de Caracas, así que los jóvenes decidieron pasar por la UCV, donde la Guardia Nacional los dejó encerrados sin poder salir hacia la Plaza Venezuela.

El presidente Maduro denunció también que los destrozos cometidos por los manifestantes y las pérdidas para el país superan los 15 mil millones de dólares. Una cifra superior a la denunciada por los dos meses de paro petrolero en 2002, pero inferior a la fugada del sistema Sitme por empresas de malletín, según denunció en su momento el ministro Giordani.

Los daños que se le adjudican a los manifestantes incluyen el incendio de la Unefa en Táchira y un incendio en la sede del Ministerio de la Vivienda, en Chacao. Sobre ese incendio, el ministro de Interior y Justicia declaró que se había afectado la

infraestructura de un preescolar que estaba en esa sede, aunque ocurrió en horas en las que no había nadie. Sin embargo, la cadena estatal con alcance mundial *Telesur*, informó que había sido quemada con 89 niños adentro que fueron rescatados. Para ilustrar la escena, el presidente Maduro usó la foto de un solo niño que corría con sus padres en la calle. Una foto de la AP que fue tomada otro día y que se describe como el desalojo de una zona que estaba siendo bombardeada con lacrimógenas. Informaciones como estas, donde incluso las fuentes oficiales se contradicen, hacen difícil una cobertura de informaciones del periodo que vive el país, pues se mezclan datos con propaganda y versiones interesadas. Mientras tanto, la ciudadanía a duras penas puede enterarse de las cosas que ocurren a través de algunos periódicos, pocas emisoras de radio y redes sociales en Internet.

DEBATE O DIÁLOGO

En el marco del encuentro Gobierno-oposición, los representantes de la MUD dejaron claro que los estudiantes y los jóvenes en protesta ameritarían otro espacio de encuentro con el Gobierno, así no cooptaban su propia lucha y sus exigencias. En el debate, el líder de Primero Justicia, Julio Borges, declaró que “diálogo y protesta van de la mano porque no hay instituciones”, advirtiendo que las acciones de calle se mantendrían. Por su parte, ante la petición de una ley de amnistía para presos políticos, el presidente Maduro dijo que “hay tiempos de perdón y tiempos de justicia. Y este es un tiempo de justicia”.

Por la MUD, Ramón Guillermo Avelo propuso la agenda de los siguientes encuentros. Ante la mirada internacional el Presidente aceptó continuar el diálogo, aunque los radicales de lado y lado sigan sin aceptar el espacio de encuentro y el reconocimiento de las partes.

MARÍA CORINA MACHADO SIN CURUL

Por hablar en la OEA ocupando el puesto del gobierno de Panamá, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cesó de su cargo a la diputada María Corina Machado. La destitución luego fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, al acogerse al artículo 149 de la Constitución: "Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional". Cabello se preguntó bajo qué cargo actuó Machado para usar la silla de Panamá, pero no lo respondió. Solo asumió que utilizar ese cargo la convertía en una funcionaria de un gobierno extranjero. Al respecto, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que la diputada Machado nunca asumió un cargo en Panamá y actuó como representante alterna, pues es una práctica usual en ese organismo. De hecho, esa figura también fue usada por el gobierno de Venezuela en el momento que cedió su derecho de palabra a representantes de Manuel Zelaya en 2009, cuando fue depuesto de la presidencia de Honduras. En esa ocasión, ni la canciller de Zelaya recibió cargo alguno en Venezuela, ni el canciller venezolano perdió su investidura.

El episodio le ha impedido a María Corina Machado, la dipu-



LA PATILLA

tada con más votos nominales en el parlamento, entrar al espacio legislativo, lo que ha proyectado su caso a nivel continental y le ha permitido ir a otros países como México, Brasil y el Parlamento Europeo para hablar de Venezuela con sus homólogos. La curul, mientras tanto, es ocupada por su suplente, Ricardo Sánchez.

PERIODISTAS EN RIESGO

La periodista Mildred Manrique, de 2001, sufrió un allanamiento de su propiedad sin orden judicial que significó su detención y la incautación de equipos electrónicos. La periodista vive aledaña a la Plaza Altamira y hacía reporte diario del enfrentamiento entre autoridades y manifestantes. Tras las protestas del gremio, las autoridades aclararon que solo la llamaron en calidad de testigo. Hechos similares ocurrieron con periodistas de los Altos Mirandinos que informaron sobre el asesinato de Adriana Urquiola, trabajadora de *Venevisión*, en Los Teques. La prensa brindó información sobre el homicida y revelaron que había sido no solo beneficiado de las liberaciones carcelarias hechas por la ministra Iris Varela, sino que además era funcionario público. Yonny "Capitán" Bolívar tenía además de sus armas y una camioneta de lujo, credencial de policía. Se desconoce de quién obtuvo ayuda para huir del país.

Por otro lado, Tamoia Calzadilla renunció a la Cadena Capriles, donde era jefa del cuerpo de investigación. Reveló muchas de las presiones políticas ejercidas desde dentro del medio después de que fuera comprado por capitales afines al Gobierno, aunque aún se desconozca quiénes son los dueños del grupo de medios más importante del país, que ahora se llama Grupo Últimas Noticias.

Por último, la periodista Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías de *Globovisión*, estuvo secuestrada una semana y fue li-

berada en la ciudad de Cúa por sus captores. Se desconocen muchos detalles del caso que no fueron revelados por las autoridades, pero el secuestro movió a importantes sectores estudiantiles, periodísticos y eclesiales durante sus días de cautiverio.

IMPUTADOS TRES GENERALES Y TREINTA OFICIALES

Treinta oficiales de diversos grados se mantienen detenidos bajo sospecha de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, han sido imputados tres generales que fueron detenidos semanas atrás por estar supuestamente vinculados a la oposición en planes desestabilizadores y por *instigación a la rebelión*.

ESCASEZ

Aunque el Banco Central de Venezuela dejó de publicar las cifras oficiales de desabastecimiento de alimentos, diversas firmas privadas han mantenido sus investigaciones para ofrecer cifras independientes. Según reporta Datanálisis, la escasez de alimentos regulados se agravó en el mes de marzo y alcanzó 60,2 %. Incluyen en la investigación los abastos de la red pública de distribución de alimentos. Para el primer trimestre de 2014, la escasez promedia 51 %, lo que significa que se conseguían solo 9 de los 18 alimentos regulados por el Gobierno. Esa cifra demuestra un crecimiento de 14,7 % de escasez respecto al mismo período de 2013.

Por otro lado, la periodista Lisseth Boon reveló que ni siquiera en zonas populares se consiguen fácilmente los alimentos y que, de hecho, para el cierre de 2013 había 14 mil 433 establecimientos estatales de distribución alimenticia, cuando en 2010 eran 19 mil 234.